

Boletín de Información Agraria y Pesquera de Estados Unidos y Canadá

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Embajada de España en Washington, D.C.

SIN RESULTADOS EN DOHA, EMPIEZA EL DEBATE SOBRE LA LEY AGRARIA ESTADOUNIDENSE



CONTENIDO:

Comienza el debate de la nueva Ley Agraria en EE.UU.	1
Arroz comercial estadounidense contaminado con variedades transgénicas	3

Las semanas que han seguido a la interrupción de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, han servido para constatar que muy pocos en los EE.UU. están preocupados por la situación creada. Las reacciones, tanto desde los ámbitos políticos, como desde las organizaciones agrarias, se han limitado a reiterar una vez más la "ambiciosa" oferta negociadora estadounidense del mes de octubre de 2005, y a recalcar su disposición a avanzar en estas negociaciones, eso sí, si los demás se mueven de sus posiciones. Es decir, que parece que la principal preocupación no es el fracaso de las negociaciones en sí, sino el evitar cualquier responsabilidad por este fracaso.

Susan Schwab, la Representante de Comercio Exterior y jefa del equipo negociador estadounidense, ha enviado una carta a una serie de Ministros de los países miembros de la OMC, en la que les urge a ponerse en contacto con ella para buscar ideas para avanzar en las negociaciones. Aunque no ha trascendido la lista concreta de ministros a los que se ha enviado esta misiva, sí se sabe que ha llegado a algunos de los ministros de países miembros de la Unión Europea. El hecho de que se haya dirigido a algunos estados miembros individualmente, a pesar de que estas negociaciones son responsabilidad de la Comisión Europea, se ha interpretado como un intento de abrir una brecha dentro de la UE.

Sin embargo, nadie cree que realmente haya posibilidades de ver

cambio alguno en la posición estadounidense, y mucho menos cuando estamos en vísperas de elecciones a las cámaras legislativas en el mes de noviembre, y cuando la autorización que el Congreso concede al Presidente para negociar este tipo de acuerdos (*la Trade Promotion Authority, TPA*) expira a mediados del año 2007, y las perspectivas de que se pueda renovar son inciertas, al menos a corto plazo.

La principal organización agraria estadounidense, la influyente *American Farm Bureau Federation*, se apresuró a respaldar la posición de los negociadores, y a pedir la extensión de la Ley Agraria (Farm Bill) que expira también en 2007. De acuerdo con la AFB, a falta de una apertura de los mercados mundiales a las exportaciones estadounidenses, no hay motivo para rebajar la "red de seguridad" que supone la actual Ley, con sus programas de ayudas a los cultivos.

En este contexto, quienes abogan por una reforma de la política agraria están en una situación difícil, ya que a falta de un acuerdo en la OMC, nada obliga a modificar esta política. Por ello, se ha formado una "coalición", en la que una serie de instituciones y organizaciones están sumando fuerzas para hacer ver a la opinión pública y a la clase política la necesidad de esta reforma, independientemente de que haya o no un acuerdo en la OMC.

Esta línea de opinión está siendo liderada por la propia Administración, a través del Secretario de Agricultura,

VISITE NUESTRO SITIO
WEB EN
WWW.MAPAUSA.ORG

Ley Agraria (viene de pág 1)

Mike Johanns. Durante una jornada informativa celebrada recientemente en el Instituto CATO de Washington, Johanns explicó que el propósito de su Administración es seguir prestando apoyo a la agricultura norteamericana, pero a través de sistemas que no supongan una distorsión del comercio. Aunque reconoce que en muchas zonas de los EEUU los agricultores desean prolongar la vigencia de la actual Ley Agraria, él defendió una reforma en profundidad.

El Secretario de agricultura explicó que tan sólo 5 cultivos absorben el 93% de las ayudas en los EEUU (en el cuatrienio 2002 – 2005, por este orden, el maíz, algodón, trigo, arroz y soja), y que los cultivos especializados (frutas y hortalizas principalmente) no reciben ninguna ayuda, a pesar de que igualan en valor a los cultivos que sí están incluidos en estos programas. Sin embargo, aclaró que el sector de los cultivos especializados no le había solicitado participar de los programas de ayudas directas, sino apoyos indirectos, incrementando las inversiones en investigación y desarrollo, fomentando la apertura de nuevos mercados, la mejora de las condiciones de comercialización, y reforzando los mecanismos de lucha contra plagas y enfermedades.

Otro argumento utilizado por Johanns fue que muchos de estos programas serán ahora vulnerables a las demandas en la OMC, una vez expirada la cláusula de paz, y con el precedente del panel del algodón ganado por Brasil. De modo que las únicas dos opciones son, a su juicio, dejar que la OMC vaya obligándoles a hacer las reformas necesarias, o tejer una nueva "red de seguridad" que no sea atacable en este ámbito.

Mike Johanns confirmó que es intención

de su Departamento el tomar un rol activo en la elaboración de la próxima "Farm Bill", y que van a hacer propuestas concretas que se materializarán con probabilidad en los comienzos del año 2007. Adelantó que algunos de los elementos de sus propuestas serán el fortalecer de forma muy importante los programas de conservación (agroambientales), el apoyo al desarrollo de biocombustibles, así como la reforma de la fiscalidad de la tierra.

En la misma sesión, el ex congresista y actual presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas, Carl Dooley, abundó en los mismos argumentos utilizados por Johanns, tachando a la actual política agraria de anticuada, por estar basada en la realidad de hace 80 años, y no ajustarse al actual fenómeno de la globalización. Puso como ejemplo la política en relación con el azúcar, a la que acusó de provocar la pérdida de más de 10.000 empleos en los últimos años en los EEUU por la deslocalización de industrias que dependen en gran medida de este producto, al no poder competir en precio y además padecer grandes incertidumbres en el abastecimiento.

Robert Thompson, de la Universidad de Illinois, intervino también para abogar por una reforma en profundidad de la Farm Bill. Expuso que los motivos que hace ochenta años llevaron al diseño de la política actual no son ya válidos: ya no hay motivo para preocuparse por garantizar unos ingresos mínimos a los agricultores, porque los agricultores tienen una renta superior a la media, y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria tampoco existe ya con una agricultura que produce un 30% más de lo que se consume internamente. Expuso que la necesidad de paliar los riesgos derivados de la climatología y de la naturaleza en general podían lograrse mejor reforzando los programas de seguros, y que otros objetivos válidos tales como la mejora de la competitividad o el desarrollo rural simplemente no estaban alcanzándose con esta política: las ayudas no mejoran la competitividad porque desincentivan la innovación, y la concentración del grueso de las ayudas en las explotaciones más grandes y eficientes no tiene nada que ver con el desarrollo rural de las pequeñas comunidades en áreas desfavorecidas.

Entre los propios agricultores están también empezando a surgir divisiones. Así el colectivo de productores de maíz—el que más se ha beneficiado de las ayudas en los últimos años—ha anunciado que se desmarca de la petición de la *American Farm Bureau Federation* de extender la "Farm Bill", y abogan ahora por un sistema que asegure unas rentas mínimas a los agricultores, en lugar del sistema actual que asegura un mínimo precio del producto. Esta posición es consecuencia del auge de la producción de etanol a partir del maíz, que ha hecho subir la demanda, y con ello el precio de este cereal, y ha hecho que ahora apenas dependan de las exportaciones y, por lo tanto, de la incertidumbre de los precios mundiales. En estas circunstancias, con un mercado



Ley Agraria (viene de pág 2)

doméstico cautivo y asegurado, es mucho más importante tratar de asegurar la rentabilidad del cultivo, que depende mucho de elementos como el coste de la energía, de los pesticidas, y sobre todo de los fertilizantes, a su vez conectados directamente al precio del gas natural, que es la fuente de energía que más ha aumentado su precio en los EEUU en los últimos meses.

De todas formas, la decisión última sobre la nueva Ley Agraria corresponde al Congreso que se renovará parcialmente en las elecciones del mes de noviembre, y que hasta ahora ha estado muy influido por los grupos agrarios de presión.

ARROZ COMERCIAL ESTADOUNIDENSE CONTAMINADO CON VARIETADES TRANSGÉNICAS

El Secretario de Agricultura de los Estados Unidos anunció en el mes de agosto que arroz comercial de grano largo estadounidense había sido contaminado con una variedad de arroz genéticamente modificado, la cual no había sido aprobada para su consumo humano.

En su comunicado el Secretario informó que la compañía que había producido el arroz experimental, Bayer, había proporcionado información tanto al Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) como a la Agencia de los Alimentos y Medicamentos (FDA) indican-

do que el arroz no supone ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

No se ha podido determinar cómo el arroz contaminado se ha distribuido por la cadena alimentaria. El USDA conoció el tema a través de la compañía directamente, tras el descubrimiento de trazas en los análisis realizados de muestras comerciales de arroz. Esta variedad transgénica de arroz, conocida como LLRICE 601, posee una proteína denominada Liberty Link que hace al arroz resistente a herbicida.

En las mismas declaraciones se indicó que Bayer no finalizó, en su momento, el proceso de aprobación para la comercialización de esta variedad de arroz. Pero la compañía sí completó dicho proceso para otras dos variedades de arroz que llevan la misma proteína. Así, según sus palabras, aunque ninguna de las dos ha sido comercializada, el hecho de estar aprobadas ofrece la seguridad de que la variedad 601 sea igualmente segura.

El Secretario también reconoció que este descubrimiento podía tener un impacto significativo sobre las ventas estadounidenses de arroz, especialmente sobre las exportaciones, las cuales suponen aproximadamente mil millones de dólares anuales. El impacto económico y político podría incluso superar el descubrimiento en el año 2000 de maíz comercial estadounidense contaminado con la variedad genéticamente modificada StarLink, la cual había sido aprobada para su uso en alimentación animal, pero no para alimentación humana por su potencial de crear reacciones alérgicas.

Tras el conocimiento de esta noticia las acciones comerciales en diversos países no se han hecho esperar. Así, la Unión Europea ha adoptado una serie de medidas que suponen que todos los cargamentos de arroz de grano largo procedentes de Estados Unidos deben estar certificados por un laboratorio acreditado como libres del arroz transgénico LLRICE 601. Japón ha prohibido las importaciones de arroz de grano largo procedentes de los EE.UU.

Por otro lado, han aparecido voces dentro de los grupos en contra de los organismos genéticamente modificados (OGM) pidiendo la prohibición total de todas las importaciones de arroz procedente de los Estados Unidos e indicando que este último escándalo demuestra una vez más que la industria de los OGM es incapaz de controlar estos organismos.

En Estados Unidos el arroz se produce principalmente en seis estados (Arkansas, Texas, Louisiana, Mississippi, Missouri y California). Según estimaciones realizadas para el año de cultivo 2006, el valor de la producción de arroz se estima en 1,88 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad espera ser exportada. Los EE.UU. proporcionan cerca del 12% del comercio mundial de arroz, siendo el 80% del arroz estadounidense exportado variedades de grano largo. Europa es uno de los principales mercados con más de 200 mil toneladas de arroz de grano largo importado anualmente por un valor de unos 60 millones de dólares.

PUBLICADO POR LA

**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN**

EMBAJADA DE ESPAÑA EN WASHINGTON, D.C.

2375 Pennsylvania Ave., NW

Washington, D.C. 20037

Teléfono: (1) 202-728 2339

Fax: (1) 202-728 2320

Correo electrónico:

info@mapausa.org